



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE TUNJA

Tunja, treinta y uno (31) de mayo de dos mil diecinueve (2019)

**Medio de control:** Repetición  
**Radicado:** 15001 33 33 004 **2019 00072 00**  
**Demandante:** **Municipio de Tunja**  
**Demandado:** Giovanna Mayelle Lobatón Piñeres y Hugo Alberto Martínez Quintero

Revisado el expediente se observa que el municipio de Tunja solicitó el embargo y retención de dineros de las cuentas bancarias, así como el embargo y secuestro de los bienes sujetos a registro que los demandados tengan en el territorio nacional.

**I. ANTECEDENTES**

En ejercicio del medio de control previsto en el artículo 142 del CPACA, el municipio de Tunja solicitó que se declare la responsabilidad de Giovanna Mayelle Lobatón Piñeres y Hugo Alberto Martínez Quintero, por los hechos que dieron lugar a la condena del ente territorial, a través de la sentencia proferida dentro del proceso de reparación de los perjuicios causados a un grupo No 2013-00088, y a su vez, se les condene al pago de la suma cancelada por la entidad, con ocasión del cumplimiento de las órdenes dispuestas en la referida providencia.

Con la demanda, el municipio de Tunja solicitó lo siguiente:

*“1-De manera preventiva ordenar el embargo de las Cuentas Bancarias que encuentren en el Territorio Nacional a nombre de la Arquitecta GIOVANNA MAYELLE LOBATON PIÑEROS, persona natural identificada con cédula de ciudadanía No 23.623.612 de Guateque Boyacá.*

*2-Solicito de su señoría, ordenar medida de embargo y secuestro de los bienes sujetos a registro que se encuentren en el Territorio Nacional a nombre de la Arquitecta GIOVANNA MAYELLE LOBATÓN PIÑEROS,*

*persona natural identificada con la cédula de ciudadanía No 23.623.612 de Guateque Boyacá.*

*3-De manera preventiva ordenar el embargo de las Cuentas Bancarias que se encuentren en el Territorio Nacional a nombre del señor HUGO ALBERTO MARTÍNEZ QUINTERO, persona natural identificado con la cédula de ciudadanía 7.165.885 de Tunja.*

*4-Solicito de su señoría, ordenar medida de embargo y secuestro de los bienes sujetos a registro que se encuentren el Territorio Nacional a nombre del señor HUGO ALBERTO MARTÍNEZ QUINTERO, persona natural identificado con cédula de ciudadanía 7.165.8856 de Tunja.”*

## **II. CONSIDERACIONES.**

Los artículos 23, 24 y 27 de la Ley 678 de 2001, sobre la procedencia y decreto de medidas cautelares en el medio de control de repetición, señalan lo siguiente:

*“**Artículo 23.** Medidas cautelares. En los procesos de acción de repetición son procedentes las medidas de embargo y secuestro de bienes sujetos a registro según las reglas del Código de Procedimiento Civil. Igualmente, se podrá Decretar la inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro.*

*Para Decretar las medidas cautelares, la entidad demandante deberá prestar caución que garantice los eventuales perjuicios que se puedan ocasionar al demandado, en la cuantía que fije el juez o magistrado.*

***Artículo 24.** Oportunidad para las medidas cautelares. La autoridad judicial que conozca de la acción de repetición o del llamamiento en garantía, antes de la notificación del auto admisorio de la demanda, decretará las medidas de inscripción de la demanda de bienes sujetos a registro, embargo y secuestro de bienes, que se hubieren solicitado.*

***Artículo 27.** Embargo y secuestro de bienes no sujetos a registro. El embargo de bienes no sujetos a registro se perfeccionará mediante su secuestro, el cual recaerá sobre los bienes que se denuncien como de propiedad del demandado.”*

En este mismo sentido, la Sección Tercera del Consejo de Estado, respecto a las medidas cautelares previstas en la Ley 678 de 2001 manifestó:

*“Así, al tenor de los artículos 23, 24 y 27 de la Ley 678 de 2001, las medidas cautelares en procesos de repetición son: (i) embargo de bienes; (ii) secuestro de bienes; e (iii) inscripción de la demanda. De igual forma, dichas normas indican que estas medidas podrán ser adoptadas hasta antes de la notificación del auto admisorio de la demanda, siempre que se reúnan los requisitos previstos para su procedencia (todas las medidas cautelares se rigen por las disposiciones de la Ley 678 de 2001. Sin embargo, en lo no previsto en dicha normativa, corresponde acudir a la legislación procesal civil).”<sup>1</sup>*

Luego, el artículo 599 del Código General del Proceso sobre las medidas cautelares de embargo y secuestro estableció:

*“Art. 599.- Embargo y secuestro. Desde la presentación de la demanda el ejecutante podrá solicitar el embargo y secuestro de bienes del ejecutado. (...)”*

Así las cosas, se advierte que el municipio de Tunja en su solicitud no indicó de manera clara los números de los productos financieros, entidades bancarias y números de matrícula inmobiliaria de los bienes sujetos a registro que figuren a nombre de los demandados en el territorio nacional, información que le correspondía suministrar al solicitante para efecto de acreditar la titularidad de las cuentas bancarias y el derecho de propiedad objeto de la medida cautelar invocada.

Por otra parte, la Corte Constitucional estableció que las medidas cautelares guardan una relación directa con el derecho de acceso a la administración de justicia, puesto que esta garantía fundamental asegura que las decisiones de los jueces sean eficaces y se cumplan<sup>2</sup>. No obstante, en cuanto al hecho de que tales medidas puedan generar un daño injustificado, no proporcional y arbitrario a los derechos del demandado, el Tribunal Constitucional consideró

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, Auto de 18 de febrero de 2019. Expediente radicado No 46301. M.P. Ramiro Pazos Guerrero.

<sup>2</sup> Corte Constitucional, sentencia T-206 de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

que “su decreto y ejecución por parte de las autoridades públicas debe conciliarse con el postulado superior relativo al respeto de los derechos fundamentales de las personas”<sup>3</sup>.

En este orden, el Consejo de Estado, al efectuar una interpretación armónica de la norma sobre medidas cautelares en procesos de repetición, precisó que solo podrán decretarse y practicarse medidas cautelares solicitadas cuando se aporte prueba sumaria del **dolo o culpa grave**<sup>4</sup> de la conducta del demandado.

En el caso concreto, se encuentra que si bien en esta etapa del proceso no se debate la validez de los argumentos esgrimidos por el municipio de Tunja en su escrito introductorio, es necesario advertir que las pruebas documentales aducidas como prueba sumaria de la culpa grave y dolo de los demandados no brindan total certeza de la calificación que merecen las conductas asumidas por Giovanna Mayelle Lobatón Piñeres y Hugo Alberto Martínez Quintero.

En esa medida, comoquiera que la culpa grave ha sido entendida por el artículo 63 del Código Civil como aquella conducta excesivamente negligente, que ni siquiera cometería la persona poco prudente en sus negocios, este Estrado Judicial estima que en el asunto bajo estudio, la conducta negligente invocada no resulta del todo clara o evidente en esta etapa procesal, razón por la cual, se encuentra ausente el requisito establecido de la prueba sumaria del dolo o culpa grave del servidor o ex servidor público objeto de repetición.

Bajo este contexto, es preciso aclarar que si bien, se advierte la ausencia del requisito indicado para acceder al decreto de las medidas cautelares conforme a lo expuesto en precedencia, ello no implica una valoración sobre la ausencia de dolo o culpa grave de los demandados, como presupuesto para la prosperidad del medio de control, puesto que dicho análisis corresponde a la sentencia, cuando se valore de manera integral el material probatorio existente en el proceso.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito Judicial de Tunja,

---

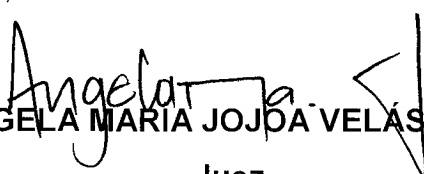
<sup>3</sup> Corte Constitucional, sentencia T-788 de 2013, Luis Guillermo Guerrero Pérez.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sección Tercera, auto del 13 de junio de 2017, rad. 58510, M.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa; auto del 28 de enero de 2016, rad. 50.743, M.P. Hernán Andrade Rincón; auto del 2 de marzo de 2010, rad. 37.590, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.

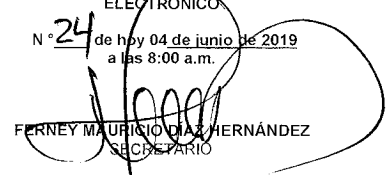
RESUELVE

**Negar** la medida cautelar solicitada por el municipio de Tunja, conforme a lo expuesto en este proveído.

Notifíquese y cúmplase

  
**ÁNGELA MARIA JOJOA VELÁSQUEZ**  
**Juez**

<sup>5</sup> AMRS

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL  
CIRCUITO DE TUNJA  
NOTIFICACIÓN POR ESTADO  
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO  
ELECTRÓNICO  
N° 24 de hoy 04 de junio de 2019  
a las 8:00 a.m.  
  
FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ  
SECRETARIO

<sup>5</sup> Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 4 de junio de 2019 en la página web [www.ramajudicial.gov.co](http://www.ramajudicial.gov.co), Ferney Mauricio Díaz Hernández - Secretario